

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email: cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuniquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO: 156

FECHA: 12 de Noviembre de 2012

BOLIVIA

LA REINA SOFÍA AUGURÓ A EVO “ESPAÑA SERÁ POBRE Y BOLIVIA RICA”, Y NO SE EQUIVOCÓ

En una reciente visita a La Paz, la Reina Sofía auguró al presidente Evo Morales que “España será pobre, y Bolivia rica”. Evidentemente la monarca no se equivocó a juzgar por la buena salud que goza hoy la economía de esta nación sudamericana.

Algunas cifras hablan por si solas de la gestión económica y financiera del actual gobierno boliviano, el cual ha logrado que sus reservas internacionales asciendan a más de 14 mil millones de dólares.

Lo anterior se traduce en que esas reservas alcanzan un 54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en los últimos tres trimestres de 2012, este estado andino ha logrado un superávit en su balanza comercial de un 83 por ciento.

Las ventas de Bolivia al exterior superan en estos momentos los 8 mil 340 millones de dólares, y sus exportaciones de gas en el año en curso pueden alcanzar los 5 mil millones.

Los expertos financieros prevén asimismo que la tasa de inflación en 2012 estará por debajo del 5 por ciento, al tiempo que el desempleo se ha reducido en el último lustro a un poco más del 4 por ciento.

No por gusto ni resaltar por ser caritativo, el Banco Mundial otorgó recientemente a Bolivia un crédito de 530 millones de dólares, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invertirá 356 millones, además de conceder otros 35 para ser utilizados en la sanidad.

El representante del BID en La Paz aseguró en declaraciones a la prensa que la determinación de su institución obedece a la solidez que ha logrado la economía boliviana.

Según datos coincidentes del BID y de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), Bolivia crecerá en 2012 en un 5 por ciento, y ocupará el segundo lugar en Sudamérica en ese aspecto, únicamente superado por Perú.

De otro lado, el ejecutivo del presidente Evo Morales materializa numerosos proyectos sociales en diferentes esferas, tanto productivas como sociales, a la vez que libra una batalla campal contra la corrupción y el narcotráfico, reconocida por instituciones internacionales.

Mientras Bolivia exhibe esos logros, España vive la peor crisis económica de su historia, con casi 5 millones de desempleados, miles de pequeñas y medianas empresas quebradas, y recortes sin precedentes en los sectores de la salud y la educación, entre otros.

Más claro que el agua, la Reina Sofía, quien por cierto habla poco, no erró cuando manifestó a Evo buenos augurios para su país en el futuro.

Fuente: [Patricio Montesinos. Rebelión](#)

COLOMBIA

NEGOCIACIÓN DE PAZ Y EL CUENTO CHINO DE LA “DEMOCRACIA” ASEDIADA

Ya se aproxima el 15 de Noviembre, fecha en la cual se abordará en Cuba el primer punto en la agenda de negociación de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Santos, relativo al desarrollo agrario, discusión de un complejo problema que está en el corazón del conflicto colombiano. Hay que reconocer que las negociaciones comenzaron con el pie izquierdo. No por las posiciones opuestas expuestas en la conferencia de prensa; si las partes en conflicto estuvieran de acuerdo no estarían negociando una salida a la Guerra. Es natural que las partes tengan posiciones antagónicas. Lo que realmente preocupa es el escaso (si no nulo) compromiso del gobierno con la solución política al conflicto y su nulo respeto por visiones de país distintas a la suya.

No solamente el discurso del comandante guerrillero Iván Márquez fue prácticamente silenciado por los grandes medios colombianos; cualquier referencia a él (sin ahondar en su contenido) lo describía como “dogmático e ideológico”, solamente por reconocer verdades que, si bien incómodas, están en la base del conflicto, como ser la violencia que emana del actual modelo económico y político. Además, el jefe de la comisión negociadora del gobierno, Humberto De la Calle, replicaba furibundo que: *“queremos un proceso eficaz, rápido y fluido, si no es así, el Gobierno ha dicho que no es rehén de este proceso”*.

Más tarde agregaba que *“ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la inversión extranjera están en discusión. **La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda** . Las ideas que quieran ventilar las Farc les corresponden y una vez acabe el conflicto tendrán que hacerlo sin armas (...) Las Farc una vez depongan las armas, una vez se firme el acuerdo final que termina el conflicto, hará política como organización. **Pero esa no es la materia de discusión de esta mesa”***.

Sin lugar a dudas que hay mucho de cuestionable en las palabras de De la Calle. Ni el modelo económico es un tema ajeno a la agenda pactada (cuyo primer tema, el desarrollo rural, tiene múltiples implicancias para el modelo económico), ni es pertinente la utilización de un lenguaje amenazante, menos cuando el proceso recién comienza. Pero hay un aspecto que nos parece fundamentalmente grave, porque es una mantra que ha sido machacada incesantemente desde los medios oficiales y desde el gobierno, a la vez que ha sido asumido por la izquierda servil al régimen: **la premisa es que las ideas políticas de la insurgencia solamente serán válidas cuando se desmovilicen y cuando las expresen mediante los mecanismos de democracia representativa existentes**. Creemos importante someter esta premisa a un examen crítico, porque está ampliamente extendida y porque representa, precisamente, un importante límite ideológico para encontrar caminos de superación del conflicto social y armado.

El error fundamental de este juicio de Humberto de la Calle, es que él asume (y esa es la trampa del discurso del régimen) que en Colombia la democracia funciona y es representativa. En esa premisa básica se revela la continuidad ideológica del uribismo al santismo, siendo éste último una versión más refinada, sofisticada, realista, menos visceral, del primero. Básicamente, la tesis plantea que en Colombia, en realidad, no existe un conflicto social y armado -si lo reconocen es solamente por fines técnico-jurídicos que no alteran su política de fondo. En su opinión, lo que existe en Colombia es una democracia madura, funcional, representativa, la cual es asediada por “terroristas”. La existencia de la insurgencia, en realidad, no se explica por ningún problema de fondo, sino que sería una especie de aberración histórica que no hemos sabido resolver, y la cual altera la perfecta convivencia de los ciudadanos. Entonces, ¿hay algo más lógico que esos “terroristas” entreguen sus armas, se desmovilicen, acepten las reglas del juego democrático, tal cual existe, y entonces hagan sus propuestas políticas?

El problema es que en Colombia no existe la democracia, ni siquiera en el sentido más estrictamente formal (electoral) del término. En una democracia no se desaparece ni asesina a los opositores en las cantidades industriales que se dan en Colombia; no se desplaza, tampoco, a campesinos, afrocolombianos e indígenas que se cruzan en el camino del Capital multinacional; tampoco se destruye mediante la persecución, el terror y el homicidio el tejido social que construyen las organizaciones populares que sustentan proyectos de vida alternativos a los del actual modelo. Hay

todo un espectro político de izquierda que fue sometido a un genocidio sin precedentes: me refiero a las experiencias de la Unión Patriótica, de A Luchar y del Frente Popular, entre otras. Habrá quien diga que eso ocurrió hace dos décadas, pero el espacio político que se cerró a sangre y fuego jamás volvió a abrirse. De esa manera, la única oposición aceptable es una sin vocación de transformación social profunda, mientras la hegemonía política se la reparte la rosca que lleva dos siglos en el poder. Mientras, toda clase de mafiosos, narcotraficantes y paramilitares, realizan su actividad política-electoral desde los partidos oficialistas sin ningún contratiempo. La parapolítica y el PIN están de testigos.

En Colombia persisten mecanismos oficiales y no oficiales de exclusión, los cuales se han heredado de la época del Frente Nacional, y se han perfeccionado bajo una apariencia de multipartidismo, en el cual existe un partido único de la oligarquía agrupado en la maltrecha Unidad Nacional. Mientras, lo poco que hay de oposición es mantenido a raya por la acción oficial de la Procuraduría y de jueces de bolsillo, por la persecución y demonización mediática, así como por el ojo omnipresente y vigilante de los escuadrones de la muerte para-oficiales.

Nada de lo que digo es nuevo. Todo esto es bien conocido y no es coincidencia que cada vez que surge un nuevo movimiento político que busca la transformación de la actual sociedad colombiana, la primera tarea de este movimiento, sea cual sea su denominación, es la de exigir que se respete la integridad física y la vida de sus miembros. Las declaraciones relativas a la supuesta “democracia” colombiana darían ganas de reírse si no fuera por la insondable tragedia humana de la guerra sucia.

Esto, para no mencionar que el pueblo colombiano tiene el derecho a cuestionar tanto la forma como el contenido del actual régimen o de su concepto de democracia, más aún cuando éste se sustenta en mecanismos de exclusión seculares y en la violencia como mecanismo de respuesta privilegiado a las demandas populares. Fueron esa violencia institucional así como esa exclusión, las que llevaron a un grupo de comunidades campesinas agredidas y asediadas a levantarse en armas. Desde Marquetalia, el Pato, Guayabero y Riochiquito, la insurgencia ha logrado consolidar una importante base social de apoyo sobretodo en las zonas rurales de Colombia de la cual emana su legitimidad, tal cual lo discutimos en un artículo previo (“[Representación Política, Legitimidad e Insurgencia](#)”). En palabras del asesor especial del Ejército de los Estados Unidos, Ronald Archer, el poder real de la insurgencia radica en sus actividades políticas y su respaldo en las áreas rurales de Colombia. Eso también lo sabe Humberto de la Calle, quien cuando aún era columnista de El Espectador hizo en Enero un llamado a arrebatar, mediante la acción militar, las bases campesinas a las FARC-EP, llamado abierto a profundizar la guerra, las violaciones contra las comunidades y a violentar la herida abierta de más de medio siglo.

Si somos serios en la necesidad de encontrar caminos para superar la guerra de raíz, debemos reconocer que el momento de la negociación es precisamente el momento de dar los debates políticos sobre proyectos de país que han sido bloqueados a sangre y fuego desde el poder por décadas. Este es el espacio que debe abrir al examen crítico la arquitectura republicana para re pensar un país diferente, que supere las condiciones estructurales del conflicto.

De la Calle debe definir si el equipo que él lidera quiere superar las causas estructurales del conflicto o si quiere una mera desmovilización. Si su opción es la mera desmovilización, el proceso de paz no tiene mucho futuro. Si su apuesta es por un diálogo político que permita abordar las causas del conflicto que no es sólo armado sino ante todo social, entonces no se explica semejante alboroto como el que montó en Oslo. Será importante, cuando lleguen a La Habana para las negociaciones, en poco más de una semana, entiendan que el primer punto que tendrán que debatir, el tema agrario, es un punto que no puede dissociarse de la discusión del actual modelo económico. Debate que, por cierto, involucra a todo el pueblo colombiano y no sólo a las élites que lo han definido a su antojo y según su más mezquino interés durante dos siglos de vida republicana.

[José Antonio Gutiérrez D.-Rebelión](#)

CHILE

OCHO MILLONES NOS CONTEMPLAN

La sorprendente abstención en las elecciones municipales -el aspecto más relevante de ese 28 de octubre-, tuvo una consecuencia imprevisible. La “clase política”, interpelada por el 60% de abstención, renunció a asumir su papel orientador. Como desplumada avestruz hundió la cabeza en la vergüenza de su derrota. Permanece sorda e insensible ante un fenómeno político-social que cuestiona los cimientos de la institucionalidad. Finge ignorar el castigo que recibió su desidia de casi un cuarto de siglo. Ni siquiera se ha atrevido a esbozar las urgentes reformas que necesita una institucionalidad heredada de la dictadura y que se asfixia en las estructuras oligárquicas de los partidos.

El atalaya de las clases dominantes, *El Mercurio*, sin embargo lo percibió con claridad y de inmediato. Al día siguiente calificó la abstención como “un hecho político mayor, que debe alertar no sólo a la ‘clase política’, sino a todos los sectores del país”. Ese diagnóstico -que ya habían avanzado el presidente de la República la noche de los escrutinios y la socióloga Marta Lagos en sus vanos intentos por colocar el tema en el Canal 13 de TV -, se deshizo como pompa de jabón. Algunos dirigentes “opositores” ni siquiera lo mencionaron. La abstención se transformó en el convidado de piedra de la política. Todos hacen como que no lo ven. A menos de 48 horas del desastre, las directivas políticas doblaron la página y se volcaron -con un entusiasmo digno de mejor causa- a preparar las elecciones del próximo año. Los candidatos a La Moneda y al Parlamento, los pactos y alianzas, los cupos de diputados y senadores, los programas para seducir al electorado eclipsaron a la monumental abstención, que probablemente es el hecho político más importante de las últimas dos décadas.

La “clase política” se cerró a piedra y lodo para impedir que entrara hasta la sombra de una duda. Dirigentes de derecha, centro y de la sedicente izquierda -convertida en compañera de viaje de la Concertación-, se encerraron en el espacio circular en que cohabitan los actores políticos. Si los partidos han rehuido su deber de analizar el fenómeno de la abstención y sacar conclusiones, sin duda esa tarea la harán las organizaciones y colectivos sociales y -en último término- cada ciudadano.

La abstención hace evidente un rechazo mayoritario a la “clase política” pero también revela la ausencia de una alternativa. Esa constatación lleva a la necesidad de trazar con firmeza y claridad el camino hacia una democracia participativa y con justicia social. A avanzar hacia un sistema de gobierno que convoque a la actividad política y a la consulta permanente a los ciudadanos. La ruta hacia esos objetivos pasa por una Asamblea Constituyente que elabore y proponga al pueblo una Constitución democrática. Pero para llegar a eso, es necesario entretanto avanzar en la formación de una fuerza social y política potente, capaz de reivindicar el rol de la política como un ejercicio diario del pueblo en el perfeccionamiento incesante de la sociedad.

No es apoliticismo lo que reclaman los 8 millones de ciudadanos que no votaron. Al contrario, la abstención indica que Chile necesita más política y más participación popular para sepultar las prácticas politiqueras. La futura conducción de la nación, surgida de una Constitución Política realmente democrática, debe proponerse desafíos de gran aliento. Sólo así se conseguirá cohesionar al pueblo y estructurar mayorías sociales y políticas capaces de derrotar toda conspiración reaccionaria.

Las elecciones municipales, en todo caso, arrojaron luz sobre elementos a considerar en un proyecto alternativo. Sus cifras son inspiradoras. La inscripción automática hizo crecer el padrón electoral en 5 millones 300 mil ciudadanos, en su mayoría jóvenes que rehusaban inscribirse y que ahora se resisten a votar. El padrón alcanza a 13 millones 143 mil 639 ciudadanos pero sólo 5 millones 261 mil 69 -casi la misma cantidad de los nuevos inscritos- eligieron a los alcaldes de las 345 comunas del país. Se produjo una abstención de 60,8%, a lo que hay que agregar 250 mil votos nulos y blancos. Conviene observar que votaron 825.826 ciudadanos menos que en las elecciones municipales del 26 de octubre de 2008, cuando la abstención -con voto obligatorio- ya alcanzaba al 17,4%.

Está claro que la abstención es masiva en los centros urbanos y entre los jóvenes. Sobre todo en comunas de niveles socio-económicos medios y altos. Su tramado político es variopinto: se abstuvieron importantes núcleos conservadores lo mismo que sectores de izquierda, todo lo cual refleja el agotamiento del sistema. Con los locales electorales semivacíos -y mesas que no recibieron un solo voto durante el día-, la abstención alcanzó en algunas comunas al 78%. Un estrepitoso fracaso de una campaña en la prensa, radio y TV llamando a votar. La mayoría de los alcaldes de comunas urbanas fueron elegidos por una minoría. En Santiago la nueva alcaldesa representa sólo al 15% de los inscritos en la comuna. En otras, es todavía peor. En Arica -afectada por la corrupción municipal- la representatividad no alcanza al 11% y en Recoleta, Puerto Montt o La Reina supera levemente el 13%.

Estas cifras configuran un cuadro funerarario para la "clase política". En particular para la Concertación ampliada, que se autoengaña porque esta vez aumentó su cuota de alcaldes y concejales. La Concertación y su acompañante presentó dos listas -el Partido Comunista fue en ambas listas y aportó su tradicional 6%-: consiguieron aventajar a la Coalición por el Cambio e invertir los resultados de 2008. En este panorama rutinario brilló por su ausencia el debate de ideas y la confrontación de proyectos. Destacaron excepciones en las comunas de Providencia, Ñuñoa y Santiago, donde tres mujeres -Josefa Errázuriz, Maya Fernández Allende y Carolina Tohá, respectivamente- desplazaron a alcaldes de extrema derecha. Providencia alcanzó relieve especial porque la candidatura de Errázuriz se gestó en las organizaciones vecinales y derrotó en primarias a los candidatos de la Concertación y de un sector liberal. Al cierre de esta edición aún era incierta la victoria de Maya Fernández, nieta del presidente Salvador Allende, en Ñuñoa.

Los motivos de la abstención son diversos y nadie los conoce a ciencia cierta. Hace falta un estudio muy profundo para sacar conclusiones que tengan validez de prueba. No obstante, al menos se puede afirmar que refleja la desafección del pueblo con el sistema que lo gobierna. Parte importante de la abstención -imposible de cuantificar ahora- corresponde al rechazo consciente al sistema de un sector que busca abrir camino a una alternativa. Proviene sobre todo de jóvenes como los que representa la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que llamó a no votar. Es el reclamo de un cambio profundo en lo institucional, político y económico-social. Justamente los grandes temas que no se abordaron en la campaña electoral.

El entusiasmo de los jóvenes por participar en elecciones y ayudar a profundizar la democracia y promover la justicia social fue decayendo a medida que la Concertación se hundía en el pantano de sus inconsecuencias. La elección de Ricardo Lagos (1999) inauguró las "dos vueltas" en las elecciones presidenciales. Tanto Lagos como Michelle Bachelet llegaron a La Moneda gracias al 6% del PC. Pero ni siquiera ese salvavidas dio resultados en el segundo intento de Frei Ruiz-Tagle, en 2009. Probablemente tampoco alcanzará para reelegir a Bachelet el 2013. Será necesario mucho más, y a eso se debe el empeño de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista por ampliar la Concertación hacia el centro e incorporar al PC y partidos francotiradores como el PRI -que se lo disputa a la otra derecha-, el PRO y el MAS.

La táctica que sigue la Concertación conducida por la DC y el PS ya consiguió derrotar a la tendencia "izquierdizante" (PPD y PRSD) y tiene muchas posibilidades de recuperar el gobierno. Su línea centrista salió fortalecida de las municipales. La lista PPD, PRSD y PC sólo obtuvo 13,70%, mientras DC y PS alcanzaron 29,40%. Por otra parte, la derecha económica está dando señales de su intención de trasladar su apuesta (y apoyo financiero) a la Concertación. En su lacrimoso editorial del 29 de octubre, *El Mercurio* revela que el empresariado quitó el piso económico a la Coalición derechista. Dice: "Olvidadas por el sector privado las amargas experiencias de los años 70, esa fuente de financiamiento de la política es hoy virtualmente inexistente...".

La derecha política se ha mostrado incapaz de gobernar en los términos que exige el empresariado de este país. Se trata de una clase empresarial que se formó en dictadura, en el molde neoliberal y cuyos intereses -que han alcanzado fabulosas ganancias- fueron priorizados durante los gobiernos de la Concertación. El gobierno de Piñera -por cierto nada diferente a los de la Concertación-, sin embargo ha colocado al país al borde de la ingobernabilidad, haciendo peligrar los intereses de la clase dominante. La protesta social ha alcanzado a ratos grados de peligrosidad para el "orden" que requieren los buenos negocios. Ha quedado demostrado -desde esa perspectiva- que la derecha

tradicional lo hace mucho mejor como oposición que en el gobierno. En cambio, una Concertación ampliada hacia el centro y con el PC a bordo, garantizaría la “paz social” que es la demanda básica de los empresarios.

Aunque la abstención fue un duro castigo para la “clase política”, ésta todavía goza de buena salud debido a la ausencia de una alternativa que necesariamente debe ser de Izquierda, ya que la centroizquierda concertacionista representa lo mismo que la centroderecha aliancista. Las dos derechas, entonces, seguirán gobernando porque no ha nacido todavía la alternativa popular, democrática y patriótica capaz de alcanzar el poder. Se trata de un difícil proceso que tomará su tiempo. Las fórmulas artificiales para acelerarlo se han demostrado inútiles, cuando no contraproducentes. Sin embargo, se debe poner manos a la obra ahora mismo. Esto significa apoyar la protesta social para organizar, hacer conciencia, resistir y coordinar. Es el camino de construcción de una mayoría anticapitalista independiente. Ocho millones de ciudadanos han dicho que quieren un país distinto. También lo creen muchos que votaron por candidatos que encarnaron una propuesta diferente.

Una mayoría impresionante está por el cambio. En ese terreno hay que plantar la semilla de la alternativa popular.

Fuente: [Manuel Cabieses Donoso](#). Punto Final

EL SALVADOR

EL EMPODERAMIENTO DE LAS MAQUILAS. DERECHOS LABORALES EN LA FÁBRICA EN EL SALVADOR

Las maquileras salvadoreñas se han organizado para influir en la reforma de la Ley de Zonas Francas que el Gobierno negocia con la patronal.

La plataforma de organizaciones sindicales y feministas que representan a las trabajadoras de la maquilatextil de El Salvador presentó en la Asamblea Legislativa la propuesta de reforma a Ley de Zonas Francas en la que se recogen las aportaciones que parten de las obreras y que tienen por objetivo crear mecanismos para garantizar el respeto a los derechos labores en las fábricas.

La propuesta se introdujo el pasado 2 de octubre en el marco de la revisión de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización que deberá estar aprobada en 2014 a instancias de la Organización Mundial del Comercio (OCM).

El texto presentado busca la reforma de 22 artículos de la Ley de Zonas Francas para garantizar el cumplimiento del artículo 29 de la actual norma, apartado en el que se recoge la obligación de los administradores de respetar los derechos laborales, tales como el derecho a asociación y sindicalización, la prohibición del trabajo forzoso o la previsión de un fondo económico que responda de forma subsidiaria ante las obreras.

Entre las propuestas elaboradas por las trabajadoras destacan la creación por parte de la empresa de un fondo que cubra las indemnizaciones en caso de cierre y la preferencia de contratación de las ex trabajadoras de una zona franca cuando la empresa ponga fin a su producción o cambie de razón social, algo que suelen hacer las maquilas al cumplir los diez años de actividad para seguir recibiendo los incentivos fiscales que contempla la ley.

Mejores condiciones laborales

También se recogen propuestas para acabar con las prácticas que atentan contra la dignidad de las trabajadoras, como la obligación de presentar pruebas de embarazo o de VIH, o ser sometidas a la prueba del polígrafo para comprobar si mienten y a revisiones corporales abusivas por si hubieran sustraído algún material de la fábrica. Con la instalación de salas cunas y de áreas para comedores se pretende facilitar su actividad durante las horas que permanecen en la maquila.

La propuesta de reforma plantea aumentar las competencias de la ya existente Comisión de Prevención de Conflictos de Empresas en las Zonas Francas, además de pedir la incorporación de las organizaciones feministas y sindicales para convertirla en una herramienta real de conciliación y

arbitraje en los conflictos labores en el marco de las empresas. Las trabajadoras de la maquila textil son uno de los colectivos que sufren las condiciones más duras de explotación y precariedad laboral en El Salvador. Con un salario de 187,60 dólares mensuales, su jornada laboral alcanza las 12 horas diarias por la obligación de cumplir las horas extras. En caso de que se impongan metas desorbitadas, las mujeres emplean el tiempo del almuerzo en terminar el trabajo.

Pero, a pesar de las condiciones tan brutales que se imponen a las obreras, aún existe un colectivo vinculado a la maquila que sufre una mayor precariedad. Es el caso de las bordadoras, mujeres que cosen a domicilio para la fábrica y que, al no tener relación laboral con la empresa, cobran unos dos dólares por cada pieza de bordado en la que emplean entre diez y doce horas de trabajo. Entre las propuestas presentadas por las trabajadoras que sí son asalariadas de la maquila, se encuentra la petición de que las bordadoras sean consideradas como personal de la fábrica y puedan beneficiarse al igual que ellas del cumplimiento de los derechos humanos y laborales.

La impunidad de las multinacionales

La propuesta de reforma también pretende acabar con la impunidad de la que gozan las más de 250 empresas instaladas en las diecisiete zonas francas del país. En el caso de que las maquilas textiles violen el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, se exige la sanción o el cierre por parte del Ministerio de Economía, medida que ya contemplaba la ley vigente pero que nunca ha sido aplicada a ninguna fábrica a pesar de los constantes abusos que se cometen en su interior.

La presentación de la propuesta de reforma de la actual Ley de Zonas Francas se produjo de la mano de las diputadas del FMLN en la Asamblea Legislativa como muestra de apoyo a las peticiones de las trabajadoras de la maquila y en contraposición al proyecto de reforma presentando por el propio Gobierno del FMLN, un texto consensuado en exclusiva entre el Ejecutivo y la patronal maquilera y que sólo prevé la modificación de los artículos que hacen referencia al apartado fiscal y económico.

Desde la plataforma se denuncia que el Gobierno de Mauricio Funes haya apartado a las trabajadoras de la negociación y no cerrara el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas en un sector que ocupa a más de 81.000 personas en El Salvador, la mayoría de ellas, mujeres con baja cualificación profesional.

Precisamente, desde las organizaciones feministas y sindicales se valora la importancia de esta propuesta por ser la única que recoge las peticiones planteadas por parte de las personas que sufren la explotación de la maquila. La presentación del texto llega después de un año de trabajo que empezó con la capacitación de las obreras en nociones económicas para que comprendieran cuál era su situación dentro de las zonas francas.

Noemí Rodríguez, abogada de Mujeres Transformando (MT), organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos y laborales de trabajadoras, explica que el proceso se inició con jornadas de formación que llevaban a cabo durante las mañanas de los domingos y en las que explicaban “qué es el capitalismo y qué son las cadenas de producción para que visualizaran el trabajo que realizan”, es decir, “cómo las maquilas se hacen ricas con el trabajo y el esfuerzo de ellas, mientras que realizan el trabajo más pesado y son a quienes menos pagan”.

Fuente: [María Cruz Tornay. Diagonal](#)

HAITÍ

SE CIFRAN EN 7.300 LOS MUERTOS CONTAGIADOS POR LOS CASCOS AZULES NEPALÍES

Medio millón de haitianos víctimas del cólera que trajo la ONU llevan casi un año esperando respuesta

A mediados de octubre de 2010, cuando Haití comenzaba a recuperarse del terremoto del mes de enero anterior, sobrevino una epidemia de cólera que se calcula ha provocado la muerte de 7.300 personas y medio millón de enfermos. El cólera no se conocía en Haití, a pesar de su deficiente sistema de alcantarillado su ubicación geográfica aislada le había mantenido alejado de esa

devastadora enfermedad. Cuando apareció, los médicos haitianos no estaban familiarizados con el protocolo de prevención y tratamiento y entre los sectores más empobrecidos lo interpretaron como una maldición de vudú. Todo ello provocó que las consecuencias fueran tan devastadoras.

El abogado de derechos humanos Mario Joseph inició en noviembre de 2011 una demanda contra la ONU que comenzó en representación de 7.000 víctimas del cólera y ahora son 15.000, entre muertos y enfermos. Y explica la siguiente: "Tras los correspondientes estudios, los expertos de la Organización Mundial de la Salud, los de Estados Unidos y los de Francia llegaron a una conclusión unánime: se trataba de un cepa de cólera que procedía del sureste asiático, concretamente de Nepal. La vía de entrada es el contingente de cascos azules procedente de ese país, donde la enfermedad es endémica".

Como es sabido, desde 2004 Haití está bajo la ocupación de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) tras la intervención militar liderada por Estados Unidos que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide. Uno de los países que ha colaborado con el envío de tropas ha sido Nepal.

En opinión de Joseph, "Haití es doblemente víctima, no sólo del cólera, sino también de una ocupación ilegal por parte de la ONU, puesto que no había ninguna guerra en el país ni representaba ninguna amenaza para la región, ni para Cuba ni para la República Dominicana".

Las misiones de la ONU como la de Haití firman un acuerdo denominado Status of Force Agreement (SOFA). "Este acuerdo", señala Mario Joseph, "prevé que los soldados de la ONU tengan una inmunidad penal, pero no civil, por eso cuando hay un daño deben pagar por ello". El letrado aclara que este daño debe ser reclamado dentro los seis meses siguientes a cuando se produce, entonces se crea una comisión de tres miembros para examinar las consecuencias. Uno de ellos lo elige el Gobierno de Haití, otro las Naciones Unidas y el tercero de común acuerdo. "Ya hace ocho años que las Naciones Unidas están en Haití y no han puesto en marcha esta comisión. Según la información de que dispongo, no se ha creado en ningún país", afirma Joseph. Y añade: "Hemos presentado la demanda acusando a la ONU de haber introducido el cólera en Haití, la hemos presentado en la oficina del secretario general en Nueva York, y en Haití. El mecanismo establecido por el SOFA no se ha puesto en marcha. No nos dan ninguna justificación. Ellos confunden inmunidad con impunidad. Debemos dejar claro que la inmunidad no es impunidad. El SOFA impide que presentemos un juicio penal contra los soldados de la ONU, pero no una demanda civil. Desde la oficina del secretario general dieron acuse de recibo de la demanda el 29 de diciembre de 2011. Entonces nos dijeron que darían una respuesta en "un tiempo razonable". No sabemos qué entienden por tiempo razonable porque ya hace diez meses. Imagina si las Naciones Unidas hubieran llevado el cólera a Estados Unidos, a Francia o a España. Seguro que ya habrían resuelto algún tipo de excusas".

La demanda solicita cien mil dólares por cada haitiano muerto y cincuenta mil por cada enfermo. Además exigen una compensación al país, no en dinero, sino mediante la creación de una infraestructura para el agua potable. Nada de ello ha sido atendido por las Naciones Unidas. "El cólera se propagó porque en Haití no existe un sistema de suministro de agua potable. Ante la grave situación del país y la destrucción que provocó el terremoto, las Naciones Unidas debían haber controlado sanitariamente a los soldados antes de traerlos, debían haber tomado muchas más precauciones, en especial referente a una enfermedad como el cólera que ya se sabía que es endémica en Nepal. No es una justificación decir que en Haití no había infraestructuras, eso no exime de responsabilidad a la ONU en el deber de controlar el estado de salud del contingente militar", afirma el abogado. Hoy los nuevos enfermos de cólera ya están siendo bien tratados y no se están produciendo muertes, los enfermos son pocos y en lugares remotos donde no se están aplicando las recomendaciones sanitarias.

"La demanda", añade el abogado, "pide también que pongan en marcha la comisión porque hay casos de violaciones, robos, pedofilia. Esto es importante porque esta comisión nunca se creó en ningún país y nuestro objetivo es que se cree por primera vez y así siente un justo precedente. Si se crea esta comisión, se pueden plantear indemnizaciones".

"Los más indignante", afirma Joseph, "es que los derechos humanos son observados para los países poderosos pero no en los países pobres. Es necesario apuntar hacia esos grandes países que son los responsables en las Naciones Unidas por lo que está pasando en Haití. Ante la tragedia del cólera, además de llevarlo a los tribunales haitianos y de Nueva York pensamos en dirigirnos a la justicia de Nepal, pero los descartamos porque pensamos que los nepalíes son solo otras víctimas como los haitianos. Las Naciones Unidas están dirigidas por cinco países que imponen su orden al resto. Nepal solo es un instrumento que las grandes potencias utilizan para ocupar Haití, es otro Estado víctima como nosotros".

Mario Joseph trabaja desde hace 16 años como defensor de derechos humanos en Haití. Es director de un despacho de abogados internacionales donde representan y asisten a víctimas de violaciones, especialmente a los más pobres y vulnerables de Haití. Se dirigen tanto a los tribunales de su país como a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Estamos trabajando también en desarrollar grupos de presión dentro de los países poderosos para concienciar sobre el crimen del cólera. En Estados Unidos 64 miembros del Congreso escribieron una carta a su embajadora en las ONU para decirle que había que hacer justicia con Haití, en Inglaterra también hemos encontrado apoyo. El asunto se trató en el examen periódico de derechos humanos de Haití en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el pasado marzo. Muchos países, como Venezuela, Cuba o Pakistán, pidieron entonces una compensación por los casos de cólera. Hasta ahora la UE no se ha pronunciado sobre el tema. Para nosotros sería bueno poder ir a España o a Italia a contar este problema porque hace falta que se conozca".

Joseph no deja de insistir en la ilegalidad de la ocupación de Haití por los cascos azules. "Mucha gente ha sido asesinada, violada y no pueden obtener justicia, como abogados nos parece escandaloso, porque no pusieron en marcha ningún mecanismo para garantizar la protección de los derechos humanos. Es la inmunidad total, vivimos una discriminación incomprensible". Otra perversión que señala Joseph es que los países pobres reciben mucha presión por parte de Estados Unidos para enviar tropas a las misiones de la ONU, los países pobres del Tercer Mundo reciben dinero de la ONU cuando envían soldados como cascos azules.

El trabajo de Mario Joseph en Haití es titánico y rodeado de amenazas. Representa a las víctimas de la dictadura de Duvalier, cuyo régimen se caracterizó por el terror y la corrupción, y también defiende a numerosos presos políticos que existen en las cárceles haitianas. El pasado mes de julio Joseph se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una investigación por la sistemática violación de los derechos humanos en su país. Desde que llegó el Gobierno de Michel Martelly, en mayo de 2011, se han producido amenazas a la prensa, detenciones arbitrarias, incluso se detuvo a un diputado en funciones. Joseph denuncia que "en Haití hay miles de desplazados internos viviendo en campos cuyos derechos fundamentales son violados constantemente".

Este compromiso le ha hecho víctima de constantes amenazas, tanto telefónicas como pintadas que se pueden observar en la fachada de su despacho. No solo no ha encontrado en el Gobierno ningún apoyo en su petición de indemnización para las víctimas del cólera y para el país, sino que recientemente el ministro de Justicia Jean Renel Sanon, molesto por las actividades de Joseph en defensa de los derechos humanos y en un gesto de clara violación de la independencia judicial, exigió al fiscal que emitiera orden de detención contra el abogado. El acoso ha llegado incluso hasta ordenar el cese el pasado 26 de septiembre del fiscal Jean Renel Sénatus por no atender la orden del ministro. Ello ha generado una campaña de denuncia de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, a la que pertenece Mario Joseph, y una acción urgente de [Amnistía Internacional](#).

Fuente: [Pascual Serrano](#). [eldiario.es](#)

HONDURAS

LA MALDICIÓN DEL ORO

Santa Elena es un municipio situado a tres horas de camino del municipio de Marcala en el departamento de La Paz, en donde aproximadamente hace cuatro años se elabora silenciosamente

una concesión minera y se prepara un preámbulo para la construcción de una represa hidroeléctrica, en una reciente visita periodística sus pobladores cuentan su historia.

Latinoamérica, 5 de nov. Según los relatos de los más ancianos, aproximadamente hace doscientos años los habitantes del municipio de Santa Elena en el departamento de La Paz, en Honduras, narraban que crecía un árbol de oro en la zona.

Sus habitantes aun describen que en Santa Elena esta leyenda se ha transmitido a varias generaciones, pero que lamentablemente en la actualidad toma un matiz real nada halagador para sus pobladores.

En una reciente entrevista desarrollada en la comunidad de Santa Elena con Julián Gonzales, quien es miembro del Foro Social para el Desarrollo Humano e Integral del Municipio de Santa Elena, describe que la preocupación de los habitantes radica en la reciente concesión que se otorgó a una compañía internacional dedicada a la extracción de minerales.

Las investigaciones efectuadas por el Foro Social para el Desarrollo Humano e Integral mencionan que esta empresa está registrada con el nombre de Inversiones Aurora perteneciente a la secretaria del Congreso Nacional, Gladis Aurora López.

Explotación

Esta empresa tiene nexos con capital estadounidense, mexicano y canadiense. Julián Gonzales describe que según los informes que les brindó la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), está documentado que en el Rio Chinacla también llevarán una maquinaria pesada para la construcción de una represa hidroeléctrica.

La documentación confirma que ya existe una concesión otorgada a esta compañía para explorar los minerales que existen en dos comunidades de Santa Elena, en el departamento de La Paz y en el Cerro de la Campana y San Marcos de Intibucá, pertenecientes al departamento de Intibucá.

El mapeo de esta concesión consiste en construir en dichas zonas una represa hidroeléctrica y efectuar una explotación minera a cielo abierto. Una parte de los terrenos en donde se pretende efectuar la explotación minera son ejidales y la otra parte de ese territorio es utilizado para la ganadería y la agricultura.

Las experiencias vividas en otras comunidades de Honduras han demostrado que la explotación minera a cielo abierto ha despojado de sus tierras a sus pobladores, dejando por su paso una fuerte contaminación del ambiente debido a los explosivos que utilizan para generar la explotación de cielo abierto.

Tratado 169

El Foro Social para el Desarrollo Humano e integral del Municipio de Santa Elena denuncia que esta concesión se hizo sin escuchar la opinión de sus pobladores, que pertenecen al pueblo originario lenca.

“Estamos de acuerdo que se explore el territorio siempre y cuando las asignaciones económicas o las ganancias sean distribuidas de forma equitativa con sus pobladores y que se efectuó una consulta popular”, afirmó Gonzales.

Sin embargo, Julián Gonzales señala que esta concesión otorgada a inversiones aurora irrespeta el tratado internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para los pueblos indígenas y afro descendientes, el que ampara a la población a efectuar una consulta popular.

La consulta debe de realizarse con el objetivo de preguntar a sus pobladores si están de acuerdo con aprobar la construcción de una represa hidroeléctrica en la zona y en su exploración minera.

Consulta popular

El tratado internacional 169 de la OIT también da la potestad de hacer una consulta popular cuando se pretende establecer un proyecto privado o público, puesto que su contexto intenta respetar la opinión de los pobladores en un determinado sitio en el mundo, para respetar los procesos democráticos participativos.

Por otra parte aún se desconoce el tipo de mineral que se explorara en la zona, puesto que está información aun esta en secreto, al respecto las autoridades locales de Santa Elena y demás zonas concesionadas guardan silencio ante este hecho que irrespeta el tratado internacional 169 de la OIT.

Ante estos acontecimientos, el Foro Social para el Desarrollo Integral y Humano exige a las autoridades competentes convocar a una consulta popular entre sus pobladores para respetar el tratado internacional 169 de la OIT.

Abandono de proyectos

Los proyectos sociales como agua, escuelas, energía eléctrica, aguas negras y demás servicios prioritarios para una vida digna, han sido olvidados en la comunidad de Santa Elena.

Este municipio es uno de los bolsones recuperados a la nación vecina de El Salvador en el fallo que otorgó la Haya en Holanda en 1992, referente a los territorios fronterizos con Honduras.

En Santa Elena la leyenda del árbol de oro, aun se narra entre sus pobladores, pero esta vez la preocupación de sus habitantes, es de que realmente exista este mineral, y que la historia futura de sus comunidades se resuma en saqueo y contaminación.

-Ronnie Huete S. ejerce la corresponsalía voluntaria de la revista Caros Amigos editada en São Paulo, Brasil para Centroamérica, la Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red y El portal <http://desacato.info> , editado en Florianópolis, Brasil.

Cualquier atentado o amenaza para el autor de este artículo es responsabilidad de quienes representan y gobiernan el Estado de Honduras.

Tomado de <http://alainet.org/active/59337&lang=es>

MÉXICO

EL RUMBO INCIERTO DE LAS IZQUIERDAS

El anuncio y llamamiento hecho el pasado 9 de septiembre por Andrés Manuel López Obrador a sus seguidores y a los integrantes de su movimiento para constituirse en partido es una empresa política de resultados inciertos, pero que ya está teniendo efectos en la conformación general del polo de izquierda del espectro político. Se ha concretado ya la escisión de las izquierdas y la diferenciación de sus proyectos tácticos ante un panorama particularmente difícil para las clases trabajadoras y las condiciones de vida de las mayorías, y ante la perspectiva de la radicalización de proyecto de ajuste estructural del gran capital.

Dos imágenes recientes dan cuenta del estado de la izquierda electoral en el momento actual. En una, el miércoles 24 de octubre, Enrique Peña Nieto posa al centro flanqueado por un grupo de gobernantes perredistas en funciones y electos. Gabino Cue, Arturo Núñez, Graco Ramírez, Ángel Aguirre y Miguel Ángel Mancera acuden a manifestarle al presidente electo su institucionalidad y su reconocimiento, y a anunciar su presencia en la ceremonia en la que éste habrá de protestar como mandatario el 1º de diciembre. A cambio, según toda evidencia, de promesas de inversión en infraestructura para los Estados del sureste, lo significativo es la presencia del grupo como tal, no en entrevistas por separado sino de manera conjunta, para evidenciar la ruptura por la derecha de los mandatarios con las posiciones sostenidas por López Obrador. Estos personajes no han esperado a la asunción del presidente electo, y algunos de ellos tampoco a su propia toma de posesión para realinearse y emprender el acercamiento con quien, apenas ayer, era señalado de ganar la Presidencia mediante las artes de la delincuencia electoral. No está de más recordar que varios de ellos (Cue, Graco, Núñez) obtuvieron sus triunfos gracias al apoyo de López Obrador, de quien ahora se distancian en el discurso y en la práctica.

Por otro lado, los dirigentes nacionales del PRD y Movimiento Ciudadano se reúnen con el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, para anunciar una alianza legislativa de largo aliento que se oponga, dicen, al “autoritarismo” implícito en la restauración priista. Más allá de las naturales coincidencias entre diversas fracciones partidarias sobre puntos concretos de la agenda legislativa,

se buscaría conformar un bloque parlamentario relativamente estable entre tendencias que se esperaría opuestas, en un periodo como éste, de afirmación del proyecto de la derecha.

Y el que, además, la primera coincidencia se haya dado en torno al proyecto de reforma laboral no es la menor de las paradojas de esta confusa situación: ese proyecto, tendiente a imponer en toda la línea el despotismo del capital sobre el trabajo, si bien proviene en realidad del Consejo Coordinador Empresarial, fue presentado por el gobierno panista y es defendido por las fracciones parlamentarias del PAN en ambas cámaras. Es el PRD el que se ha sumado, en virtud tan sólo de la inclusión de algunos artículos relativos a la democracia y la transparencia sindicales y de los contratos colectivos, a una iniciativa atentatoria, por decir lo menos, a los intereses de las clases laborantes.

La ruptura de López Obrador con los partidos identificados como de izquierda no sólo lo emancipó a él de compañías y alianzas cada vez más complejas e incómodas, sino también liberó a éstos de una presencia igualmente incómoda y del mayor obstáculo para renegociar su mejor inserción en el régimen político. Ausente el lopezobradorismo, las corrientes de derecha, hegemónicas en éstos, no guardan recato alguno para acercarse al inminente gobierno del PRI o al PAN y apoyar los respectivos proyectos de éstos. Es grotesco el espectáculo de los senadores perredistas concertando con el PAN y su representante en el Senado, Javier Lozano, la aprobación de la reforma en materia laboral. Al final, sabemos, ya sea de acuerdo con las izquierdas o sin él, el PAN votará la reforma, *su* reforma, con la única fuerza parlamentaria que la puede hacer ley, el PRI. Y Enrique Peña Nieto ha dado instrucciones de aprobarla antes del 1 de diciembre próximo, tal como fue concertado, seguramente, con Felipe Calderón.

La esquizofrenia del PRD (alineamiento “institucional” de sus gobernantes electos con el gobierno priista, por un lado; bloque parlamentario con el PAN y contra el PRI, por el otro) es algo más que un tributo a su pragmatismo ya estructural. Sin duda se debe al hecho de haber servido como mera plataforma electoral para el relanzamiento de políticos que no tuvieron cabida en el priismo en sus respectivas entidades: Aguirre Rivero en Guerrero, Cue en Oaxaca, Juan Sabinés en Chiapas, Núñez en Tabasco; pero sobre todo a su renuncia a la construcción de un proyecto político-social de izquierda y a su necesidad de insertarse en el sistema político en forma negociada con los factores reales de poder.

Ante ese panorama, la apuesta del lopezobradorismo es sumamente arriesgada. Se trata de un movimiento-partido construido en todo el país al impulso de los procesos electorales de 2006 y 2012, pero que no puede ser meramente electoral. Creció bajo el cobijo del registro de tres partidos ya constituidos, PRD, PT y MC, y ahora se constituirá fragmentándolos y debilitándolos como opciones electorales. Al erigirse como partido, no le bastará con obtener el porcentaje de votación de 2 por ciento para conservar un registro, sino que necesita aparecer como el referente principal de las izquierdas electorales y, al mismo tiempo, no dejar de ser un movimiento con fuerte arraigo en la sociedad y vinculación con los sectores movilizados en resistencia al proyecto de dominación vigente. Pero Morena no nace sin problemas. En diversos Estados del país se ha convertido en receptáculo de las burocracias locales del PRD, el PT y hasta del PAN, que entran a reproducir en el naciente partido las prácticas de clientelismo, corrupción, posibilismo y negociación que las caracterizaron en sus anteriores organizaciones. El mismo López Obrador ha prohijado, no exento de pragmatismo, la integración de esos grupos a su movimiento, mismos que ahora vienen a asumir un papel protagónico.

Pero es quizás ese pragmatismo lo que ha distanciado a AMLO y al Morena de fuerzas más consistentes con el proyecto de izquierda, como el SME, que —a su vez, haciendo gala de la misma dolencia— se está planteando constituir con el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia y también con otros contingentes, su propio partido, de base trabajadora.

Las izquierdas, solas o sumadas, difícilmente lograrán alcanzar en 2015 el porcentaje de votación que en este 2012, salvo por hechos que resulten catastróficos para el gobierno de Peña Nieto. Lo que está por verse es hasta dónde alcanzará el hoy Morena a llenar el vacío de una izquierda digna de ese nombre en el terreno electoral y legislativo, y si logrará escapar a los vicios de los partidos ya insertos en el sistema político-electoral. Pero mucho más importante, si las izquierdas podrán reconstituirse a partir de un proyecto nacional y de intereses generales, más allá del pragmatismo,

los diseños electorales y la inmediatez que la avasallan. Hoy, pocos indicios apuntan en ese sentido; pero es necesario apostar y luchar por eso antes que caer en el desánimo y la depresión.

Informa: Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH, en <http://www.rebellion.org>

NICARAGUA

ELECCIONES: FUE UN VERDADERO TSUNAMI...

FSLN obtuvo 134 alcaldías y casi el 70 por ciento de los votos. En Managua arrasa con más del 80 por ciento. OEA reconoce legitimidad del proceso

Con el 98.7 por ciento de los votos escrutados, el gobernante Frente sandinista de liberación nacional, Fsln, que encabeza la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, logró alzarse con 134 de las 153 alcaldías que existen en el país, 25 más de las que había ganado en 2008. También pasa a administrar 16 de las 17 cabeceras departamentales.

El FSLN ganó todos los municipios de los departamentos de Madriz, Estelí, Chinandega, León, Managua, Carazo, Rivas, Granada, Masaya. Además, ganó en lugares históricamente hostiles al sandinismo, como en Chontales, Boaco, Raan y Raas, en el centro y en la Costa Caribe.

La Alianza Pli del ex banquero Eduardo Montealegre y el Partido liberal constitucionalista, Plc, del ex presidente Arnoldo Alemán, sufrieron una derrota mayúscula al ganar solamente 12 y 2 alcaldías respectivamente. El partido indígena Yatama obtuvo 3 y la Alianza liberal nicaragüense, Aln, una alcaldía.

Casi 2.1 millones de nicaragüenses ejercieron su derecho al voto - 70,085 fueron los votos nulos - con una participación del 57.70 por ciento del padrón electoral activo. Según el magistrado presidente del Consejo supremo electoral, Roberto Rivas, se trata de la elección municipal donde más gente ha ejercido su derecho al voto.

Rivas rechazó los planteamientos de algunas organizaciones (Ética y Transparencia), que insisten en señalar un supuesto abstencionismo de hasta el 70 por ciento, junto con la manipulación de los datos presentados por la máxima autoridad electoral.

En cuanto a los votos totales, el Fsln obtuvo el 67.9 por ciento - 5 puntos más que en las pasadas elecciones presidenciales de 2011 -, la Alianza Pli el 21.1, el Plc el 8.5 por ciento. Con menos del 1 por ciento los otros partidos.

En Managua, la candidata del Fsln, Daisy Torres, obtuvo más del 83 por ciento de los votos (283,750), mientras que el candidato de la Alianza Pli ni siquiera sumó el 10 por ciento de los sufragios (33,676).

OEA satisfecha

Mientras el Departamento de estado norteamericano emitió un comunicado muy contradictorio, en el que expresa cierta preocupación porque las elecciones "no lograron demostrar un grado de transparencia que aseguraría a los nicaragüenses y a la comunidad internacional que el proceso reflejó fielmente el deseo del pueblo nicaragüense", la Misión de acompañamiento de la OEA resaltó la celebración de las elecciones municipales "en un ambiente de civismo en que los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses pudieron ejercer su derecho al voto de manera pacífica".

El jefe de la Misión, el mexicano Lázaro Cárdenas Batel, dio lectura a un comunicado en el que aseguró que contaron "con las garantías de acceso para desarrollar sus tareas con normalidad".

También valoró como "un avance relevante" la reciente reforma electoral que tomó en cuenta las recomendaciones de la OEA, implementando la paridad de género, la depuración del padrón electoral, así como la descentralización a nivel municipal de la entrega de acreditaciones a los fiscales.

"Un año después de las elecciones presidenciales y a cuatro años de la siguiente elección, la Misión considera que hay oportunidad para profundizar en el perfeccionamiento del sistema electoral nicaragüense", se lee en el comunicado.

Tomado de <http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/2012/11/elecciones-en-nicaragua-fue-un.html>

PANAMÁ

UN TRATADO COMERCIAL ASIMÉTRICO Y DESIGUAL

La economía panameña representa aproximadamente una dos milésima (0.002) parte de la de EEUU. Por cada transacción que se realiza en Panamá, en el país del norte se realizan 500. En otras palabras, los panameños y extranjeros en el istmo producimos en 2011 – en bienes y servicios - cerca de 32 mil millones de dólares. Los norteamericanos, y la gran población extranjera que reside en ese país, generaron gracias a su trabajo cerca de 16,000 mil millones de dólares. Algo como 500 veces más que los panameños.

Si analizamos estas cifras por cada habitante, la diferencia entre los países también es significativa. Los 320 millones de norteamericanos producen anualmente – cada uno - en promedio, casi 50 mil dólares. En cambio, los panameños producimos por cada habitante 10 mil dólares al año.

La desigualdad social y económica en ambos países es muy marcada. Entre los países industrializados del mundo, EEUU tiene la tasa de desigualdad socioeconómica más alta. Panamá se coloca entre los tres países de América latina con las tasas de mayor desigualdad. América latina es la región con las tasas de desigualdad más elevadas del mundo.

En Panamá, el 20 por ciento más rico concentra más del 60 por ciento de todas las riquezas del país. Algo parecido ocurre en EEUU. La desigualdad social y económica en dos países también explica las tasas altas de violencia, el porcentaje elevado de personas encarceladas y los problemas en sus sistemas de educación y salud.

Panamá es un país sub-desarrollado (en el sentido de su producción para el mercado capitalista). En los últimos 20 años (1990-2010) ha visto su producción industrial y agropecuaria disminuir. En cambio, los sectores que especulan con las finanzas han crecido en forma significativa (representan el 80 por ciento del producto interno bruto). Igualmente, las actividades económicas asociadas con el comercio marítimo mundial: Canal de Panamá, puertos, seguros y otros.

En este marco de creciente contradicciones sociales y de incertidumbre económica, Panamá y EEUU puso en efecto esta semana un tratado de "comercio libre" cuya negociación se inició hace más de diez años y que fuera firmado en 2007. EEUU, sin embargo, no lo ratificó hasta octubre de 2011 (junto con instrumentos similares con Colombia y Corea del Sur). Además, Washington le impuso a Panamá un conjunto de acuerdos que no estaban en el pacto original. Es un acuerdo que refleja la asimetría entre las partes. El gigante económico de EEUU manejará un vehículo donde Panamá queda colgada de una ventana sin posibilidad alguna de sacar ventaja del paseo. EEUU podrá colocar (*dump*) en el mercado panameño todo lo que produce. En cambio, Panamá no podrá vender sus productos en el país del norte.

Según el director de la Oficina de Comercio Exterior de EEUU, Ron Kirk, "bajo los términos acordados Panamá eliminará los aranceles y otros obstáculos a las importaciones norteamericanas. El tratado, agrega Kirk, promoverá el crecimiento económico y la expansión del comercio entre los dos países". Obviamente, el gobierno panameño no tiene algo que decir. Su silencio lo dice todo. Para Panamá el acuerdo promoverá más subdesarrollo económico y menos exportaciones a ese país.

El acuerdo final se logró cuando hace unas semanas el presidente Ricardo Martinelli firmara una adenda permitiendo que EEUU aplicara su legislación sobre propiedad intelectual y patentes en Panamá. Panamá también permitirá que EEUU utilice sus mecanismos de resolución de conflictos en el país. Panamá es uno de los pocos países del mundo que permitió que EEUU reemplazara su propia legislación por reglamentos norteamericanos en esta materia.

Según la oficina de Comercio Exterior de Washington, el tratado le permitirá a EEUU introducir al mercado panameño, entre otros productos, arroz y azúcar. Panamá es un importante productor de arroz para una población que privilegia el consumo de ese rubro. El gobierno panameño ya les ha notificado a los agricultores de arroz que cambien de producción para acomodar el arroz norteamericano. Cuando la oficina de Comercio Exterior de EEUU se refiere al azúcar hay indicios de un cambio histórico de política. Desde principios del siglo XX, Panamá exporta azúcar (de caña) a EEUU.

En 2010 las exportaciones de EEUU a Panamá sumaron un total de 8.2 mil millones de dólares. Panamá, a su vez, sin incluir los servicios marítimos (Canal de Panamá) y bancarios, le exportó a EEUU menos de 500 millones de dólares. Con el tratado, EEUU proyecta que sus exportaciones aumentarán a 20 mil millones de dólares. Panamá no se beneficiará. La relación entre ambos países continuará con los mismos vicios de desigualdad, asimetría y sólo beneficiará a una de las partes.

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

Tomado de <http://alainet.org/active/59300>

PUEBLOS INDÍGENAS

LOS SIGUEN MATANDO

Recientemente se han cumplido 520 años de la llegada de occidente al continente americano. Ese día ha sido bautizado con multitud de nombres dependiendo de la mayor o menor intencionalidad política. Así, cuando ésta trataba de extender el orgullo de la conquista, hablaba abiertamente del Día de la Raza o de la Hispanidad. Cuando, pasando los años, daba un cierto sonrojo lo anterior, se pasó a definir como Encuentro de Culturas y otros eufemismos que igualmente ocultaban un abierto regocijo por lo que se consideraba magna obra civilizatoria hispana sobre pueblos salvajes. De una u otra forma, tanto unos como otros epítetos para ese día ocultaban permanentemente la existencia, todavía hoy, de pueblos indígenas descendientes directos de aquellas otras civilizaciones que se trataron de eliminar. Así, presentaban la realidad americana como el resultado natural de un proceso de mestizaje homogenizante de pueblos y culturas. Sin embargo, estos pueblos indígenas, aquellos que no habían desaparecido a pesar del duro proceso colonial, y que hoy todavía viven, sonríen y luchan por sus derechos como personas y pueblos, simplemente dicen que no hay nada que celebrar.

Pero, a pesar de todo lo vivido durante estos siglos, todavía hay una constante que se alarga durante todo este tiempo. A los pueblos indígenas, a hombres y mujeres diferentes a la civilización dominante, los siguen maltratando, los robando sus tierras y los siguen asesinando. Estos pueblos siguen poniendo, hoy como ayer, los muertos sobre la mesa en ese permanente conflicto abierto hace más de 500 años contra ellos. Desde el extremo sur hasta el norte del continente, siguen siendo diana de las balas, siguen siendo el centro escogido de la represión más brutal. Es un dudoso lugar de honor que ocupan junto con otro colectivo humano como son las mujeres, en este caso tanto indígenas como no indígenas, y que siguen siendo también centro de las violencias machistas que se resisten a desaparecer. Y tanto una situación como otra siguen ocurriendo en América, aunque también en otras formas en Europa. África o Asia.

En los territorios del sur del continente americano, casi en su extremo, el pueblo mapuche sufre la represión y pone muertos, además de prisioneros políticos que se abocan hacia la muerte mediante huelgas de hambre como única forma de protesta contra las injusticias. Defienden sus tierras de transnacionales hidroeléctricas y madereras y ante hacendados privilegiados por los gobiernos de turno; unos y otros llevan décadas robando los recursos naturales de las comunidades, aquellas que los guardaron durante cientos de años. Se niegan a reconocerse como campesinos y a renunciar a su dignidad como pueblo que hasta hace poco más de un siglo dominaba el sur del continente y hoy se ve abocado a perder los últimos pedazos de su territorio.

En Colombia, los pueblos indígenas siguen poniendo los muertos en la lucha entre el ejército, paramilitares y las guerrillas. En los últimos meses, nuevamente ganaron un pequeño espacio en algunos medios de comunicación internacionales pues, cansados de ser asesinados, osaron expulsar a los actores armados de sus territorios, en especial al ejército, en el departamento del Cauca. Reivindicaban derechos reconocidos por el derecho internacional, pero también por la legislación colombiana y nunca aplicados por ésta, sino continuamente violados; derecho al territorio, derecho a la vida, derecho a la dignidad como personas y como pueblos. Pareciera que todos los poderes políticos y económicos pensarán que los derechos indígenas están bien para rubricarlos en la ley y ganar un reconocimiento internacional, pero son derechos que no obligan a ser cumplidos. Esperemos que la nueva etapa abierta en Colombia de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno suponga que los pueblos indígenas, una vez más, no sean ignorados y todos, indígenas y no indígenas, campesinos, mujeres..., caminen hacia la paz, pero una paz justa para todos y todas, incluyendo a estos pueblos.

Guatemala concluyó en 1996 cuarenta años de guerra civil con la firma de los Acuerdos de Paz. Entre éstos, uno de los más importantes era el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Acuerdo firmado, acuerdo ignorado por los sucesivos gobiernos guatemaltecos. Y hoy el fantasma de la muerte continua se abate una vez más sobre el pueblo maya. Llegaron las transnacionales mineras, hidroeléctricas, petroleras... a los territorios indígenas y pensaron que, con el respaldo abierto de los distintos gobiernos, el territorio estaba abierto a la plena explotación, al expolio, sin considerar que en esas tierras viven personas desde hace miles de años. Pero los pueblos recuperan su dignidad y procesos de lucha y se oponen, poniendo en práctica la protesta, pero también la democracia participativa a través de las consultas comunitarias en las que toda la población de una zona determinada participa y decide si permite la entrada de transnacionales en su territorio. La oposición masiva de los pueblos mayas a la destrucción de la tierra y de sus modos de vida trae, una vez más, la dura respuesta de los poderes políticos y económicos del país, con el respaldo de ciertos poderes internacionales. Desde entonces los asesinatos selectivos de dirigentes, las amenazas continuas y la represión abierta contra los pueblos se va haciendo nuevamente cotidiana. El pueblo maya recuerda las aldeas arrasadas, las mujeres violadas, los cientos de miles de muertos y exiliados en los años de la guerra civil. Hoy el drama no solo no se ha cerrado por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, sino que continúa y se reaviva. El día 4 de octubre, a unos días de ese día 12 del mismo mes, ante la protesta masiva de la población en Totonicapán, a convocatoria de sus autoridades, 8 indígenas fueron asesinados y decenas heridos. El gobierno en un primer momento negó su responsabilidad e incluso argumentó que ni policía ni ejército tenían armas de fuego. Sin embargo, las nuevas tecnologías permitieron que en minutos corrieran por las redes sociales fotografías de elementos del ejército guatemalteco armado de fusiles de asalto y disparando contra la población. El delito en esta ocasión: la protesta contra el alza del precio de la energía eléctrica, para una población que vive en la pobreza; también la oposición a las reformas constitucionales que el gobierno guatemalteco quiere aprobar y que suponen, entre otras medidas, el recorte de las atribuciones de las autoridades tradicionales en la impartición de la justicia. Claro que el gobierno del presidente (general retirado) Otto Pérez Molina sabe perfectamente cómo tratar estas situaciones, por algo su lema de campaña era "mano dura" y él mismo fue militar en activo durante los años del llamado genocidio maya.

Los casos citados, así como otros muchos que se siguen dando en diferentes países del continente americano, avalan la decisión del movimiento indígena continental por la no celebración del 12 de octubre. Pero también demuestran, con la crudeza del título de este escrito que, 520 años después del inicio del genocidio, por intereses políticos y económicos ajenos a ellos, a los pueblos indígenas se les sigue matando y resulta barato pues, ni antes ni ahora, parece que habrá responsables que paguen por estos crímenes.

Fuente: [Jesus González Pazos. Rebelión](#)

VENEZUELA

VENEZUELA, ¿UN PAÍS DIVIDIDO?

Las terminales políticas y mediáticas del capitalismo neoliberal llevan 14 años difundiendo el mensaje de que Hugo Chávez ha dividido a Venezuela en dos mitades irreconciliables. Las pasadas elecciones presidenciales serían una prueba más de esa polarización. “Venezuela se fractura en las urnas”, tituló El País en su edición en papel del 8 de octubre cuando, por la diferencia horaria en el momento del cierre del diario, aún no se conocía el resultado de los comicios. Por tanto, la dirección del periódico ya apuntalaba el argumento de la división antes incluso de saber el veredicto de las urnas.

La falsedad de esta razonamiento queda patente al comparar Venezuela con otros sistemas presidencialistas similares. Obama ganó en 1998 a John McCain por 7,2 puntos. François Hollande derrotó a Sarkozy por algo más de tres puntos, la misma distancia que la obtenida por el chileno Sebastián Piñera en 2009. El pasado mes de julio, Enrique Peña Nieto alcanzó la Presidencia de México seis puntos de ventaja sobre Manuel López Obrador.

Nadie dice que Estados Unidos, Francia, Chile o México estén fracturados, a pesar de que sus actuales presidentes ganaron las elecciones por menos diferencia que Hugo Chávez frente a Henrique Capriles (once puntos). En muchos sistemas democráticos, el electorado se agrupa en torno a dos opciones políticas. Este fenómeno es más acentuado en regímenes presidencialistas y alcanza su máxima expresión en las elecciones a la Jefatura de Estado. Es algo que se considera absolutamente normal y que no indica ninguna división del país. Salvo en Venezuela, donde sería la prueba palpable de la radical partición provocada por Chávez.

Este argumento de la división tiene una segunda parte. Una de esas dos mitades sería la víctima, carente de derechos y libertades, mientras que la otra disfrutaría de todos los privilegios. Según el relato mediático del neoliberalismo, las supuestas víctimas optaron por Capriles por entender que defendía una Venezuela para todos y todas y no sólo para una parte.

Por tanto, el resultado de las elecciones debe interpretarse como un llamamiento a Hugo Chávez para que gobierne para toda Venezuela. Justo al día siguiente de la victoria de Chávez, comenzaron las apelaciones al diálogo, el consenso, la unidad, etc.

Un mínimo análisis revela que esta segunda parte de la argumentación también es falsa. Venezuela está hoy más cohesionada que hace 14 años. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Venezuela es el país donde más ha disminuido la desigualdad en los últimos diez años. Por su parte, el Programa para Asentamientos Humanos de Naciones Unidas señala que el país caribeño es, junto con Uruguay, el menos desigual de todo el subcontinente.

En 1998, más del 80% de la población no podía comer tres veces al día. En la actualidad, el 96% de los habitantes realiza tres o más comidas diarias. Se ha erradicado la mortalidad infantil y también el analfabetismo, a la vez que se ha extendido la enseñanza superior: Venezuela ocupa el quinto lugar del mundo en tasa de estudiantes universitarios. La sanidad gratuita se ha universalizado. Durante esta década, la riqueza se ha redistribuido, disminuyendo la pobreza de un 60% a un 28% y la pobreza extrema de un 25% a un 7%. Venezuela ya no es aquel país en el que un 85% de la población luchaba por sobrevivir mientras el 5% se iba cada fin de semana a Miami de compras.

El argumento de la división es utilizado por las élites económicas para salvaguardar sus intereses, muy diferentes a los de las clases populares y clases medias. En realidad, las preocupaciones de esta casta no tienen nada que ver con los de las 6,5 millones de votantes de Capriles, aunque el enorme dominio de los medios de comunicación que ostenta le haya permitido convencer a esa gran cantidad de gente de que sus intereses son los mismos.

Gobernar para todos y todas es que los beneficios del petróleo reviertan en el pueblo y no que las transnacionales se apropien este recurso estratégico, que es lo que realmente pretenden las élites y lo que ocurría en el pasado. Gobernar para todos y todas es universalizar la sanidad gratuita y no dejar la salud en manos de compañías de seguros, farmacéuticas y empresas sanitarias. Gobernar para todos y todas es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y no permitir que la comida sea una mercancía controlada por las grandes cadenas de hipermercados. Gobernar para todos y todas

es crear universidades estatales de calidad y no limitar la enseñanza superior a carísimas instituciones privadas accesibles únicamente a los cachorros de la oligarquía. Gobernar para todos y todas es que el Estado construya directamente tres millones de viviendas en lugar de permitir la especulación inmobiliaria de la que sólo se benefician bancos y empresas constructoras.

Estos datos y consideraciones demuestran que el proyecto político liderado por Hugo Chávez gobierna para la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas. Venezuela está hoy más unida de lo que lo ha estado nunca en su historia.

[Alejandro Fierro, periodista y colaborador de la Fundación CEPS](#)